JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL

Cucunubá, Cundinamarca, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

REF: ACCIÓN DE TUTELA.

RAD: 2021-00119-00

ACCIONANTE: TULIO ANDRÉS ALONSO CONTRERAS

ACCIONADO: ADELO VELÁSQUEZ – MINA LA ERA

ANTECEDENTES

El señor Tulio Andrés Alonso Contreras interpuso acción de tutela contra el señor Adelo Velásquez como propietario de la mina La Era y ex empleador del actor, para que se le proteja su derecho fundamental de petición. En consecuencia de lo anterior se solicita por ordenar al accionado que en un término de 48 horas resuelva la solicitud presentada por medio de petición radicada el 17 de agosto de 2021 y proceda a realizar en tal sentido el pago de las prestaciones sociales adeudadas junto con los salarios pendientes.

HECHOS:

Según lo expone el actor inició a trabajar como empleado de la Mina La Era de propiedad del señor Adelo Velásquez, la cual se encuentra en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá desde el 07 de enero de 2020 y se retiró el 31 de octubre del mismo año, que desde esa fecha se le adeuda la liquidación además de la última quincena y que pese a solicitarla en repetidas ocasiones la misma al día de hoy no le han sido canceladas. En tal sentido valiéndose de su derecho fundamental de petición radicó solicitud el pasado 17 de agosto de 2021 radico al accionado solicitud en la que requería el pago de las prestaciones adeudadas en la suma de tres millones quinientos ochenta y un mil doscientos treinta pesos, de la cual pasados dos meses no ha recibido respuesta alguna por Adelo Velásquez.

ACTUACIÓN PROCESAL:

La presente acción constitucional se recibió por parte de este despacho judicial el pasado 03 de noviembre de 2021 siendo atendida mediante auto calendado en la misma fecha ordenando la admisión de la acción de tutela y concediendo el término de dos días al accionado para que se pronunciara sobre los hechos objeto de la acción. Se tiende además

que la misma fue notificada por medio del correo electrónico al accionado y de manera personal al accionante Tulio Andrés Alonso Contreras.

RESPUESTA DEL ACCIONADO:

Obra en el expediente Constancia Secretarial del escribiente del despacho en el que se pone de presente que se comunicó telefónicamente en dos oportunidades con el abonado 3134990650 de propiedad del accionado y que al mismo le fue notificado en debida forma la acción de tutela al correo adelovelasquez51@gmail.com sin que este se pronunciara respecto a la presente acción.

PROBLEMA JURIDICO:

En el presente caso, corresponde a este despacho determinar si al señor Tulio Andrés Alonso Contreras se le vulneró su derecho fundamental de petición por parte de Adelo Velásquez en su calidad de ex empleador del actor en la mina La Era.

Procede el despacho a decidir la presente acción constitucional previas las siguientes;

CONSIDERACIONES

En primer lugar, el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acción de tutela señala que dicha acción procede contra toda acción u omisión de autoridades públicas o privadas de ser el caso, cuando se violen o amenacen derechos fundamentales, de tal manera que los jueces constitucionales de tutela deben en todo momento analizar las acciones adelantadas por dichas autoridades que amenacen o vulneren derechos fundamentales particulares, de tal manera que se tomen las acciones correctivas para la protección de tales derechos y en especial la satisfacción de los fines esenciales del estado para con los particulares.

Ahora bien, el capítulo tercero del Decreto 2591 de 1991 señala la procedencia de la acción de tutela contra particulares en los siguientes casos:

“ARTICULO 42.-Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación de servicios públicos.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.

De lo narrado en el libelo de la demanda de tutela se desprende que el señor Tulio Andrés Alonso Contreras en calidad de accionante presentó solicitud ante un particular, esto es Adelo Velásquez, persona que era su empleador por lo que se encuentra acreditada una de las causales establecidas para conocer del presente asunto, máxime cuando se entiende la existencia de una situación de subordinación de empleador y ex empleado por lo que se aplica perfectamente la causal contenida en el numeral cuarto del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Respecto del Derecho de Petición:

La Constitución política de Colombia ha definido este derecho de la siguiente manera en sus articulados catalogándolo como fundamental así:

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Por parte de la Corte Constitucional en su calidad de intérprete de la Constitución ha definido el derecho de petición en diversos pronunciamientos judiciales así:

“El derecho de petición consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. (Sentencia T-161/2011. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO)

Consejo Superior

“Esta corporación ha señalado el alcance de ese derecho y ha manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio democrático. El derecho fundamental de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas características se traduce en la vulneración de esta garantía constitucional.”

(...)

“La jurisprudencia de Corte Constitucional ha puesto de relieve la relación existente entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, precisando que “la Constitución consagra expresamente el derecho fundamental de acceso a información pública (C.P. art. 74) y el derecho fundamental de petición (C.P. art. 23) como herramientas esenciales para hacer efectivos los principios de transparencia y publicidad de los actos del Estado. En este sentido, la Corte ha reiterado que tales derechos son mecanismos esenciales para la satisfacción de los principios de publicidad y transparencia y en consecuencia se convierten en una salvaguarda fundamental de las personas contra la arbitrariedad estatal y en condiciones de posibilidad de los derechos políticos. Por tales razones, los límites a tales derechos se encuentran sometidos a exigentes condiciones constitucionales y el juicio de constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo riguroso.” (Sentencia T-172/2013. M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO)

Se ha precisado por parte de la Honorable Corte Constitucional que el derecho de petición es fundamental, de carácter prioritario y efectivo, esto en tanto es un medio de comunicación directo entre un particular o entidad y la administración, esta que debe atender las solicitudes no solo para dar efectividad a los derechos de las personas, bien sean naturales y jurídicas, sino porque el imperio de la ley así se los exige tal como estableció Ley 1437 de 2011. También esta alta corporación aclara que:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Corte ha

considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.” (Sentencias T-294 de 1997 M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO y T-457 de 1994. M.P. JORGE ARANGO MEJÍA)

Frente a lo anterior según el dictado de la jurisprudencia a manera de conclusión que el ejercicio del derecho de petición se encuentra intrínsecamente protegido por la Constitución, es un derecho fundamental que ampara a todas las personas para que presenten sus peticiones respetuosas y que las mismas les sean absueltas, este es un medio de satisfacción de su derecho aún cuando la respuesta no implique que esta deba ser concediendo todo lo solicitado.

DEL CASO EN CONCRETO.

Una vez estudiada la jurisprudencia constitucional respecto de la cual se interpreta el derecho Constitucional Fundamental de petición se tiene como toda persona puede presentar peticiones respetuosas a las entidades públicas o particulares cuando se presente la situación de subordinación, al respecto este derecho se encuentra regulado por la Ley 1755 de 2015, ley estatutaria que estableció los términos en los cuales dichas peticiones deben ser absueltas.

De las pruebas halladas en el expediente, se desprende que:

- Que obra derecho de petición presentado por Tulio Andrés Alonso Contreras en contra de Adelo Velásquez como propietario de la mina La Era, el cual cuenta con recibido del 17 de agosto de 2021, documento en el cual solicita el pago de la liquidación mas salarios adeudados por el empleador.

Se tiene que los particulares, como es el caso del actor, se encuentran facultados para presentar peticiones respetuosas ante particulares para que sean absueltas sus solicitudes, adicionalmente que para el caso objeto de estudio constitucional el actor radicó ante el accionado Adelo Velásquez petición del pasado 17 de agosto de 2021 en la que pone de presente requiere el pago de la suma de \$3.581.230 pesos, la cual como obra en documentales no existe prueba de haber sido resuelta por el actor, máxime que el mismo no se pronunció de fondo respecto a la presente acción constitucional.

Respecto del derecho de petición vale la pena resaltar el sentido que le ha dado la honorable Corte Constitucional, frente al cual si bien todo particular puede presentar peticiones respetuosas, en este caso ante el particular Adelo Velásquez en su calidad de ex empleador, la misma debe según su núcleo fundamental ser absuelta en términos, dentro de lo pedido y de fondo. Al respecto del término de las solicitudes de petición ha sido reglado el asunto por la ley estatutaria 1755 de 2015, está por medio de la cual se modificó el artículo 14 de la ley 1437 de 2011 así:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al

petionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al petionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

Según la ley en cita, las peticiones deben absolverse en 15 días desde presentada la misma, lo cual para el caso en cuestión, no obra respuesta alguna por parte del accionado pese a ser debidamente notificado, denotando esto que se afecta de manera directa lo contenido en el núcleo esencial del derecho de petición puesto que no obra respuesta ni en términos, ni de fondo, ni dentro de lo pedido, implicando de manera directa la afectación al derecho fundamental que le asiste al actor, por lo que el despacho considera necesario amparar la petición presentada por el actor de tal forma que se resuelva de fondo la misma sin que ello implique que la misma deba ser atendiendo todo lo pedido sino respondiendo a cada una de las solicitudes presentadas.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cucunubá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

- 1. CONCEDER** la acción de tutela presentada por Tulio Andrés Alonso Contreras en contra de Adelo Velásquez por la violación de su derecho fundamental de petición de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
- 2. ORDENAR** a ADELO VELÁSQUEZ que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de la presente sentencia de tutela que de contestación de fondo, inmediata y de acuerdo a lo pedido por Tulio Andrés Alonso Contreras radicada ante el mismo el 17 de Agosto de 2021.

3. **EXHORTAR** a Adelo Velásquez para que en futuras ocasiones de contestación en términos, de fondo y dentro de lo pedido a lo solicitado por los particulares.
4. Notifíquese personalmente o por el medio más expedito, lo aquí expuesto, en las direcciones enunciadas en el libelo, tanto a la accionante como al demandado.
5. En caso de no ser impugnada, remítase el expediente, dentro del término legal a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIANA MARCELA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ

JUEZ

Firmado Por:

Diana Marcela Ibañez Hernandez

Juez

Juzgado Municipal

Juzgado 001 Promiscuo Municipal

Cucunuba - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

fad1d20cd9424efb1daa16a23b73a42febd785f1ae52a6e8a2a9c70ca8498ca8

Documento generado en 17/11/2021 03:37:31 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>